



**Cumple con subir el salario mínimo, con la comisión del caso Iguala y la apertura de Los Pinos, entre otras; falla en tener una buena relación con los poderes Judicial y Legislativo.**

En los primeros 30 días de su mandato, Andrés Manuel López Obrador comenzó a concretar 32 de los 100 compromisos asumidos en el Zócalo, mientras que por la oposición de algunos sectores a sus propuestas, falló en tener una buena relación con los poderes Judicial y Legislativo.

En este primer mes cumplió su oferta de una reforma educativa, una comisión de la verdad para el caso Iguala y no usar el avión presidencial, ni la protección del Estado Mayor Presidencial.

En las primeras horas como presidente, formalizó el cierre de Los Pinos como residencia oficial y se abrió al público como Centro Cultural. También dedica entre cuatro y cinco días de la semana a recorrer el país y el primer día hábil de su mandato comenzaron las reuniones con su gabinete de Seguridad Pública.

El cuarto día de su gobierno, envió una iniciativa al Senado para reformar el artículo 108 de la Constitución a fin de que el Ejecutivo federal pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano, la cual no ha avanzado en el Congreso.

Dio paso a su compromiso de conformar coordinaciones de seguridad pública en todas las entidades, con la aprobación pendiente de la Guardia Nacional. Además, envió el avión presidencial a California para comenzar su proceso de venta.

En tanto, el Congreso aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de acuerdo con el compromiso de que ningún funcionario público gane más que el jefe del Poder Ejecutivo.

Sus promesas de rescate del sector energético incluyeron la presentación de los planes nacionales para producir más petróleo, gas y energía eléctrica sin usar *fracking*; rehabilitar seis refinerías y construir la de Dos Bocas, con especial atención a las 60 hidroeléctricas existentes.

El Presidente anunció un plan de apoyo por 10 mil millones de pesos a los damnificados de los sismos de 2017 y presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de una de sus promesas emblema: cancelar la reforma educativa.

Ésta incluye la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), devolver plaza a los maestros cesados y comenzar el proceso de liberación de “presos políticos”, varios de ellos docentes.

Dio a conocer el Plan Nacional de Salud para hacerlo un derecho universal, federalizando sus servicios y el 15 de diciembre, con su proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, avanzó en el cumplimiento de sus compromisos de financiar los programas de bienestar con ahorros derivados de medidas de austeridad.

En Palenque, Chiapas, pidió permiso a la madre tierra para comenzar las obras del Tren Maya, su proyecto de infraestructura más importante, y un día después anunció el aumento de 16 por ciento al salario mínimo.

Destacó el inicio de la construcción de 100 universidades públicas en el país, así como la atención especial a los indígenas. Informó que los primeros días de enero comenzarán los trabajos de construcción de tres pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para solucionar la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México y concretar la cancelación de las obras en Texcoco.

Además, como parte de su promesa 34, se afilió a Pensionissste, terminando así el servicio de atención médica privada para servidores públicos con recursos del erario. En Oaxaca dio el banderazo de salida a los trabajos de pavimentación de caminos en los municipios más rezagados y el Istmo de Tehuantepec, y decretó que a partir de hoy, en la frontera con EU, se reduce el ISR, el IVA y el precio de los combustibles.

Como parte de las promesas incumplidas están la 92, que contempla relaciones respetuosas con los poderes Legislativo y Judicial, luego de que a los jueces los llamó corruptos por sus altos sueldos y a los diputados los señaló de pactar *moches* en el presupuesto.

También quedó a deber con la nueve, con la que prometió más apoyo al Conacyt; tampoco mantuvo ni reforzó las instancias infantiles. Falló en que los 50 consulados de México en EU se conviertan en procuradurías para la defensa de migrantes y recortó su presupuesto 80 por ciento. Finalmente, dijo que ningún funcionario puede cerrar calles, pero legisladores de Morena se estacionaron en doble y hasta triple fila en el Zócalo. (Jannet López. Milenio)

Escrito por Redacción

Martes, 01 de Enero de 2019 07:52

---